

Crisis de acumulación en el Norte y reestructuración del agro en Centroamérica: una interpretación situada del modelo primario-exportador en el siglo XXI

A L F O N S O F R A D E J A S *

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/07/2011; FECHA DE APROBACIÓN: 15/11/2011.

RESUMEN: Aunque en esencia los catalizadores y consecuencias de este tercer hito histórico del despojo indígena y campesino en marcha en Centroamérica convergen desde hace más de 500 años, existen ciertas particularidades con respecto al colonial, e incluso con respecto al acaecido a partir de las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX. La crisis de (sobre)acumulación con sus diversas expresiones en lo económico-financiero, lo alimentario y lo ambiental, con la que inicia el siglo XXI en el Norte económico se relativiza para el capital financiero internacional que no solo encuentra refugio rentable, sino también incentivos públicos y renovada legitimidad en los mercados de futuros y derivados de materias primas como el petróleo, los minerales, los alimentos y otros productos agrícolas. Es entonces en este contexto estructural -y con la intención de comprender las nuevas particularidades- que planteamos una crítica de la economía, la ecología y la sociología política de los procesos de reestructuración territorial asociados al despliegue de un régimen flexible de capitalismo agrario en Centroamérica, a la luz de sus determinaciones sobre la vulnerabilidad social y ecológica de familias y comunidades rurales, indígenas y campesinas, en Guatemala. Los planteamientos acá presentados, derivados de investigación aplicada desde el año 2006, giran alrededor de dos componentes centrales de los sistemas de sustento de la población rural, indígena y campesina de Guatemala, que a su vez son dos determinantes clave de su vulnerabilidad social: i) las capacidades para ganar, controlar y mantener el acceso a la tierra cultivable y a otros bienes naturales; y ii) las estrategias productivas y reproductivas de la familia/comunidad, incluyendo la cuestión agraria del trabajo y de las relaciones sociales de producción y reproducción.

PALABRAS CLAVE:

- Centroamérica
- Guatemala
- crisis
- plantaciones agro-industriales
- agro-combustibles
- agronegocios
- Estados y elites post-coloniales
- sistemas de sustento
- tierra
- territorio
- agricultura familiar
- bienes naturales
- campesina/o
- pueblos indígenas

Crisis of accumulation in the North and agrarian restructuring in Central America: a situated interpretation of the raw material & feedstock's export model in the 21ST Century

ABSTRACT: This article entails a critical analysis of the political economy and ecology of the current territorial re-structuring processes associated with the deployment of a flexible regime of agrarian capitalism in Central America, in light of its determinations over the human and social vulnerability of indigenous-peasant farmers in the territories of expanding oil palm plantations in Guatemala. Attention is paid to the main discourses of public and private stakeholders as well as to the specific material and cultural dispossession practices of this revisited dynamic that generates agrarian and resource-use conflict, once again catalyzed by demand drivers emerging from world (northern) markets related to the revalorization of commodities and the agrofuels fever. The discussion derived from comprehensive applied research since 2006 focuses on the impacts on two fundamental components of the livelihoods of Guatemala's indigenous-peasant population, as core determinants of social vulnerability: i) the ability (means, processes and relations) by which actors are enabled to gain, control and maintain access to arable land and natural resources; ii) the household/community productive and reproductive strategies, including the labor implications and the social relations of production and reproduction.

KEYWORDS:

- Central America
- Guatemala
- crisis
- plantations
- agrofuels
- agribusinesses
- post-colonial states and elites
- livelihoods
- land
- territory
- peasantry
- indigenous peoples
- land and natural resources management practices and institutions
- women in indigenous-peasant economies

* Responsable de Investigación sobre Tierra y Territorio. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la CONGCOOP. Guatemala.

Introducción

La inserción económica mundial de América Latina (Indígena y Afro-descendiente) bajo un modelo de corte primario-exportador no es ninguna novedad. Más bien, con la excepción de dos etapas radicalmente opuestas del capitalismo del siglo XX, como la de sustitución de importaciones y la neoliberal ortodoxa, este modelo de integración/dominación ha sido una constante histórica desde la invasión española.¹

Ahora bien, aunque en esencia sus catalizadores y consecuencias convergen desde hace más de 500 años, el tercer hito histórico del despojo indígena y campesino en marcha en el istmo centroamericano presenta ciertas particularidades y diferencias con respecto al colonial, e incluso con respecto al ocurrido ya en plena modernidad capitalista a partir de las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Es por ello que este artículo pretende abundar en las implicaciones del renovado impulso primario-exportador, desde un análisis crítico situado espacialmente en territorios centroamericanos en disputa, y temporalmente en la crisis de (sobre)acumulación en el Norte económico.

Para ello se delinearán las tesis centrales de una crítica de la economía, la ecología y la sociología política de los procesos de re-estructuración territorial asociados con el despliegue de un régimen flexible de capitalismo agrario en Centroamérica, a la luz de sus determinaciones sobre la vulnerabilidad humana y social de la población guatemalteca, y particularmente de la población indígena y campesina de los territorios de expansión de las plantaciones de caña de azúcar y de palma aceitera.

I. El agro centroamericano en el contexto histórico del capitalismo mundial

La crisis de (sobre)acumulación con sus diversas expresiones en lo económico-financiero, lo alimentario y lo ambiental, con la que inicia el siglo XXI en el Norte económico marca un parte aguas con la ortodoxia neoliberal de fines del siglo pasado. Ante la temida “estanflación” (congelación del crecimiento económico, ligada a un repunte inflacionario) el capital ha venido adoptando una

doble estrategia: Por un lado, la que contempla medidas que “alivian la contracción de la ganancia a través de *apretar a otros*; absorbiendo capitales más débiles mediante la formación de carteles, fusiones y adquisiciones, o *apretando* a las economías más débiles y *apretando* a las clases trabajadoras reduciendo los salarios reales, la tributación, las medidas anti-inflacionarias o el pago de la deuda” (Araghi y Mc Michael, 2006. Énfasis propio).

Por otro lado, se vienen promoviendo medidas que contribuyen a que la inversión se “traslade de las actividades productivas que lo inmovilizan, llevando a cabo reformas organizacionales para incrementar su flexibilidad” (*ibid*)—de ahí la llamada acumulación flexible de capital entendida políticamente—, y a “incrementar masivamente las inversiones con alta liquidez a través de las finanzas, la especulación [...]” (Arrigi, 1944, en Araghi y Mc Michael, 2006).

Siguiendo estas prescripciones, la crisis se relativiza para el capital financiero internacional que no sólo encuentra refugio rentable, sino también incentivos públicos y renovada legitimidad, en los mercados de futuros y derivados de materias primas como el petróleo, los minerales, los alimentos y otras materias primas agrícolas.

Las virtudes de esta reubicación del capital financiero han sido destacadas en las Cumbres del G-20 (2009 y 2011) así como por el Banco Mundial desde que dedicara su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2008 a la “Agricultura para el desarrollo” (BM, 2007), y especialmente en su informe sobre acaparamiento de tierras de 2010 (*Rising Global Interest in Farmland*) en el que sostiene que “las adquisiciones de tierra a gran escala pueden ser un vehículo para la *reducción de la pobreza* a través de tres mecanismos principales: 1) la generación de empleo asalariado; 2) la generación de nuevas oportunidades para la agricultura por contrato con campesinos, y 3) los pagos por la cesión o la venta de la tierra” (BM, 2010: 38-39-64. Énfasis propio).

En el caso latinoamericano es el Secretario General de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, quien recomienda “aprovechar” este viraje del capital financiero hacia las materias primas en el marco de la crisis de (sobre)acumulación, señalando que “uno de los aspectos positivos de la crisis serán las nuevas inversiones destinadas a cubrir la *demanda global* [...] Tenemos que desarrollar la agricultura, tenemos que hacer de este sector un *objeto más* de flujos de inversión y de crecimiento” (*América Economía*, 17/06/2011. Énfasis propio).

Un planteamiento, el de la necesidad de invertir en la agricultura, que en principio es tan incuestionable como impostergable en la mayoría de los países del sur global, y especialmente en aquellos como los centroamericanos en los que se conjugan elevadas tasas de desnutrición² y/o vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con Estados debilitados política y financieramente cuyos sectores

¹ Para un excelente y revelador análisis crítico del cambio en el sistema agroalimentario mundial y latinoamericano a lo largo de la modernidad capitalista, ver los trabajos de Rubio (2009, 2010) y McMichael (2005, 2006).

² Destacan los datos críticos de desnutrición crónica infantil en Guatemala (49%), Honduras (25%) y Nicaragua (20%) (UNICEF 2008).

públicos agrícolas fueron desmantelados, o reducidos a la mínima expresión, por las políticas de ajuste estructural y sectorial de la economía durante la etapa neoliberal ortodoxa, sin el desarrollo paralelo de la industria y/o de los servicios.

Sin embargo, el renovado interés del capital en la agricultura no se ha caracterizado en los últimos años precisamente por orientar la inversión a “erradicar el hambre”, a través del fortalecimiento de las capacidades y los sistemas agroalimentarios campesinos en los países/territorios de destino. Todo lo contrario. Frente a la lógica colonial, y la liberal del s. XIX de la ventaja comparativa de la producción agrícola a gran escala en países ricos en recursos y pobres en capital, ha sido una lógica de inversión con fines de seguridad nacional (alimentaria, hídrica y energética) la que viene orientando a los actuales países importadores de petróleo y alimentos afectados por los elevados y variables precios de las materias primas en los mercados internacionales (sobre todo en el Norte, pero también en Oriente Medio y en las “economías emergentes” del Sur).

En este contexto, muchos agronegocios consiguen respaldo financiero para integrarse aún más verticalmente y fortalecer su control sobre las cadenas agrícolas globales. Así, entre 2003 y 2008 las participaciones del capital financiero en los índices de materias primas pasaron de US\$13 a US\$317 billones (Kaufman, 2010: 32) y los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa en la agricultura pasaron de unos US\$600 millones/año en los 90, a US\$ 3 billones en el periodo 2005-2007 (UNCTAD 2009).

Unas cifras stronómicas que contrastan con el carácter altamente especulativo de la inversión. Según el Banco Mundial, de los 42 millones de hectáreas en las que se interesaron a nivel global diferentes tipos de inversores entre el año 2008 y 2009, el 30% no había logrado aún los permisos gubernamentales a fines de 2010, el 18% tenía los permisos pero no había comenzado, el 30% seguía en fases iniciales de desarrollo del proyecto y tan sólo el 21% había iniciado el cultivo, a menudo en una escala mucho menor de la pretendida (BM, 2010, xiv: 36).

Algo que es importante destacar es que de ese 21% en producción, tan sólo una tercera parte se dedica a cultivos alimentarios (BM, 2010: 51). Y es que si consideramos los límites a la acumulación que caracteriza a la inversión en la producción de alimentos (por la inelasticidad de su demanda),³ podremos observar cómo el catalizador del alza de los precios de los productos agrícolas (y por lo tanto, de su rol como refugio para el capital financiero) se asienta de manera especial sobre la creciente —y ésta sí elástica— demanda de *agrocombustibles* (Houtart, 2010: 128).

Legitimados en la conocida demagogia verde, y a pesar de (o precisamente “por”) los impactos directos

e indirectos que su producción está teniendo sobre el alza y la variabilidad en los precios de los productos agrícolas, muchos Estados y especialmente los Estados Unidos de América (EEUU) y la Unión Europea (UE), continúan fomentando y respaldando la producción y el uso de agrocombustibles, tanto a través de marcos normativos y de política pública, como a través de subsidios directos.⁴ Y todo apunta a que tanto este interés del capital financiero en la producción de agrocombustibles, como el incremento sostenido de los precios del petróleo (en el que el capital financiero también juega su parte⁵) seguirán motivando el crecimiento de la producción mundial de agrocombustibles en el futuro. Según una estimación conservadora (Deininger, 2011: 4) alrededor de 6 nuevos millones de hectáreas se sumarán anualmente a la producción agropecuaria hasta el año 2030, principalmente en África, Asia, América Latina y Europa del Este.⁶

En definitiva, tenemos que esta nueva —y triple— fiebre del oro (amarillo, negro y verde) desatada a inicios del s. XXI, ha contribuido de manera determinante a que no sólo los cultivos agrícolas sean considerados mercancías o *commodities* por el capital financiero internacional, sino que también lo sean la tierra y en general la base natural de recursos y bienes, conformándose un dinámico mercado global de derechos sobre la tierra y el agua (Mann y Smaller, 2010: 2) e incluso sobre el oxígeno y el carbono.

³ La cual bajo las actuales condiciones de marginalización económica de la población mundial difícilmente crecerá más allá de las necesidades de reproducción humana.

⁴ Según Bloomberg New Energy Finance “el monto de subsidios globales a las industrias de energía renovable y biocombustibles ascendió a entre US\$43 y US\$46 billones en el año 2009, incluyendo apoyos arancelarios, créditos financieros, créditos fiscales, subvenciones en efectivo y otros subsidios directos” (Business Green 2010).

⁵ Goldman Sachs, el mayor banco de inversiones estadounidense, consideró que el 60% del aumento del valor del petróleo en el año 2008 se debió a la especulación financiera, y un 30% a la caída del dólar (*Prensa Latina*, 20/08/08).

⁶ Y un reciente estudio del Banco Mundial (Timilsina, *et. al.*, 2011, p. 25) plantea cómo de situarse el precio del petróleo en el año 2020 en la cota de US\$112/barril -nada descabellada según las tendencias de los últimos 10 años-, el uso de agrocombustibles en el transporte aumentaría al 12.6%, frente al 2.4% en 2010. Algo que provocaría una reducción del 2.8% en la oferta mundial de alimentos en el año 2020 con relación a la de 2010, para una población mundial que para el 2020 se estima entre un 11.4% y un 22.3% mayor que la de 2010 (ONU 2004, 14). Y esto sin considerar las crecientes tensiones y problemas de equidad y de acceso al alimento.

Consecuentemente, de la crisis de (sobre)acumulación vigente se desatan profundos procesos de re-estructuración territorial a escala mundial, pero especialmente en países (aún) ricos en recursos, con el fin de generar las condiciones para un renovado ciclo de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003) en cuyo marco, y articulado bajo una “lógica de territorio” y una “lógica de capital” (*Ibid*), se despliega en Centroamérica un modelo *flexible* de capitalismo agrario con relación tanto a los modos, como a las relaciones sociales de producción y reproducción.

En este contexto, si bien en los últimos años Centroamérica ha experimentado un crecimiento exponencial de las licencias de exploración y explotación de minerales y petróleo, la re-orientación primario-exportadora del istmo se asienta fundamentalmente sobre el renovado acaparamiento de tierras para la producción extensiva de monocultivos de exportación, bajo un régimen flexible de capitalismo agrario. Así, aunque se han incrementado las superficies con frutas de exportación, y las de monocultivos forestales, son las plantaciones de caña de azúcar y las de palma aceitera las que lideran las cifras de crecimiento y superficie establecida, por su vinculación directa o indirecta con la creciente demanda mundial de agrocombustibles.

Es por estas razones, que nos aproximaremos a la comprensión de los impactos de la crisis en el agro centroamericano a partir del análisis crítico de la economía, la ecología y la sociología política de los procesos de re-estructuración territorial asociados con el despliegue de un régimen flexible de capitalismo agrario, a la luz de sus determinaciones sobre la vulnerabilidad humana y social de la población guatemalteca, y particularmente de la población indígena y campesina de los territorios de expansión de las plantaciones de caña de azúcar y de palma aceitera.

Desde esta perspectiva, el concepto de vulnerabilidad humana y social toma un carácter prospectivo (Alwang, *et. al.*, 2001, p. 1) pues busca describir la susceptibilidad de las personas, familias y comunidades indígenas y campesinas a sufrir una pérdida o reducción futura tanto de sus capacidades colectivas para desempeñar un rol en la agricultura y la provisión alimentaria de hoy en día, como de sus capacidades de reproducción de la vida y de

manejo efectivo de sus territorios. La vulnerabilidad es un concepto complejo que abarca diferentes componentes, los cuales integran las dos dimensiones fundamentales de la vulnerabilidad: i) el riesgo, y ii) la falta (o erosión) de capacidades individuales/sociales, así como de acceso y control de la base material de recursos (Chambers, 1989; Cannon, 1994, y Blaikie, *et. al.*, 1994).

Estas dimensiones de la vulnerabilidad están altamente determinadas por la *composición, sensibilidad,⁷ resiliencia,⁸ y sostenibilidad⁹* de los *sistemas de sustento* practicados (Maxwell y Smith, 1992: 33-37). Un concepto, el de sistema de sustento (del inglés *livelihood*), que interpreto de manera particular con fines de investigación agraria y rural bajo una perspectiva compleja y crítica, como un conjunto interrelacionado de diferentes componentes encauzados a la reproducción y sostenibilidad de la vida, entre los que figuran: i) las estrategias productivas y reproductivas en sí (susceptibles de generar ingreso, plusvalía, valor agregado, alimento y otros bienes); ii) las capacidades de acceso, uso y control de los medios de producción/reproducción y de los bienes naturales (tierra, bosque, agua, etc.); iii) los medios y capacidades para usar los anteriores de manera sostenible, y iv) las relaciones sociales y los derechos que permiten, legitiman y jerarquizan el uso y la toma de decisiones sobre los mismos.

Desde esta perspectiva, los sistemas de sustento no están cerrados a las influencias del contexto ni son estáticos, sino que están sujetos a múltiples tensiones y son determinados históricamente.

II. Discursos, mecanismos de apropiación de tierras y estrategias de reestructuración territorial de los agronegocios de la caña de azúcar y la palma aceitera

El gran capital agrario-exportador en Guatemala (así como en Honduras y en buena medida en El Salvador y Nicaragua), está básicamente controlado por la oligarquía criolla post-colonial, aunque también empresas y capitales transnacionales, así como un creciente número de alianzas entre los primeros y los segundos, van ganando importancia. El mercado se encuentra controlado por 14 familias criollas (13 guatemaltecas y 1 nicaragüense), en el caso de la industria del azúcar/etanol/generación de energía de bagazo, y por 5 de estas familias y un grupo de capital/riesgo estadounidense-británico (Goldman Sachs & The Carlyle Group), en el caso de la industria del aceite de palma. Ambos oligopolios se encuentran representados en diversos y poderosos grupos nacionales e internacionales de presión política y de legitimación según los dictámenes de la Responsabilidad Social Corporativa.

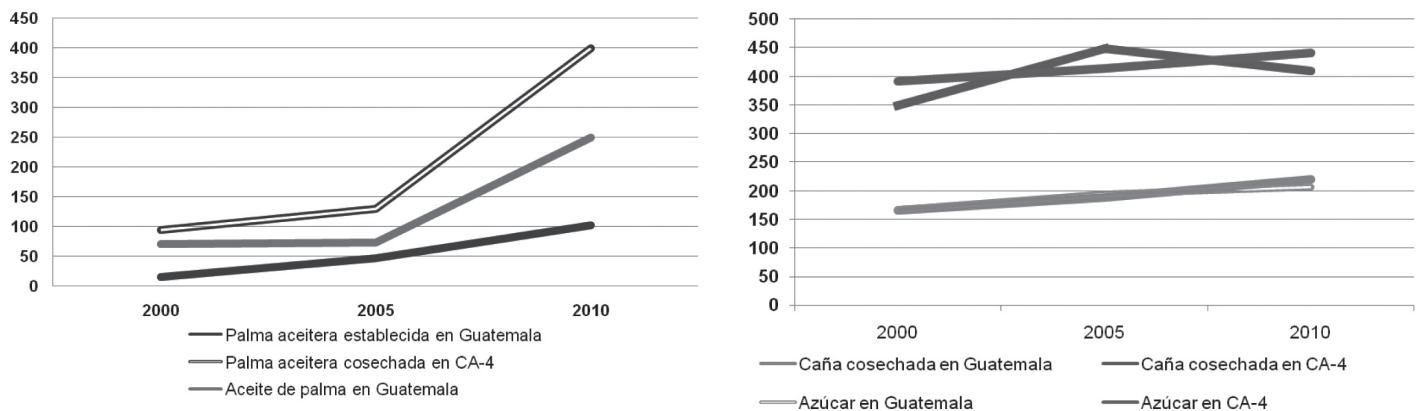
⁷ Capacidad de respuesta rápida a los cambios endógenos o exógenos, positivos o negativos.

⁸ Capacidad de recuperación tras una crisis.

⁹ Capacidad de perdurar a lo largo del tiempo a pesar de las agresiones que sufra, o de las tendencias adversas a largo plazo, sin socavar la base de recursos.

Incentivados (y financiados) por los altos precios y demanda internacional de sus productos, y al abrigo de estos grupos de presión, los agronegocios de la caña y de la palma combinan (con base en Harvey, 2003) *estrategias de desplazamiento temporal*, orientadas a desviar recursos excedentes hoy, hacia la generación de rentabilidades futuras (bajo una lógica de capital) con *estrategias de desplazamiento espacial* (bajo una lógica de territorio) orientadas a conformar nuevos espacios funcionales para la producción de caña, palma y sus derivados.

Figuras 1 y 2
Superficie con palma aceitera y caña de azúcar (miles de ha) y producción de aceite de palma y azúcar (miles de tm) en Guatemala y Centroamérica-4*. 2000-2010



*Centroamérica 4 (CA-4) incluye sólo a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

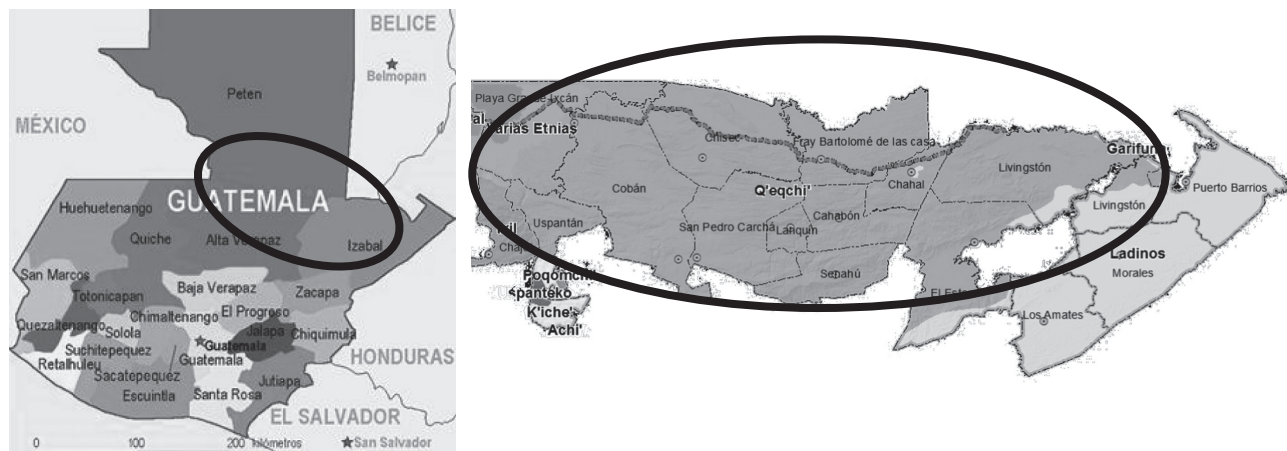
Fuente: Elaboración propia a partir de BANGUAT 2010, FAOSTAT 2011 y CEPALSTAT-SIAGRO 2011. Cifras de producción de azúcar en CA-4 2010= cifra 2007 (último dato disponible).

Aunque la superficie con caña es superior a la establecida con palma, la primera viene expandiéndose sobre todo en las tierras de la Costa Sur (Pacífico),¹⁰ las cuales fueron acaparadas ya para plantaciones de exportación durante el segundo hito histórico del despojo indígena y campesino en Guatemala, a partir de 1850. Por su parte, el grueso de la superficie total establecida, y casi el 100% de las nuevas plantaciones desde el año 2000, se sitúan sobre territorios de colonización agrícola y desarrollo campesino a partir de la segunda mitad del s. XX en las tierras bajas del norte. Es por ello que abundaremos principalmente sobre los impactos de la expansión de la palma aceitera, y lo haremos a partir de resultados de investigación desarrollada desde el año 2007 en seis zonas socio-agroecológicas situadas en las tierras bajas del norte de Guatemala (ver Figura 3). Estas seis zonas son: Sayaxché (sur del departamento de Petén); Chisec y Fray Bartolomé de las Casas (Alta Verapaz); Ixcán (Quiché); Polochic Valle (Izabal y Alta Verapaz), y Polochic Sierra (Alta Verapaz).¹¹

¹⁰ Con la significativa excepción del Ingenio Guadalupe, que en el año 2005 se trasladó bajo el nombre de Ingenio Chabil Utzaj al Valle del Polochic, en las tierras bajas del norte, acaparando 5,400 hectáreas y generando graves conflictos con los trabajadores y la población Maya-Q'eqchi' sin tierra de la zona.

¹¹ Con una población total de 318,643 habitantes y una densidad poblacional de 54 habitantes por Km², la cual se ha triplicado en los últimos 25 años. El 77% de la población es rural y cerca del 90% es indígena, principalmente Maya-Q'eqchi' (INE 2002).

Figura 3
Mapas administrativo y de composición étnica. El círculo demarca el área de estudio, coincidente con tierras por debajo de los 500 m.s.n.mar



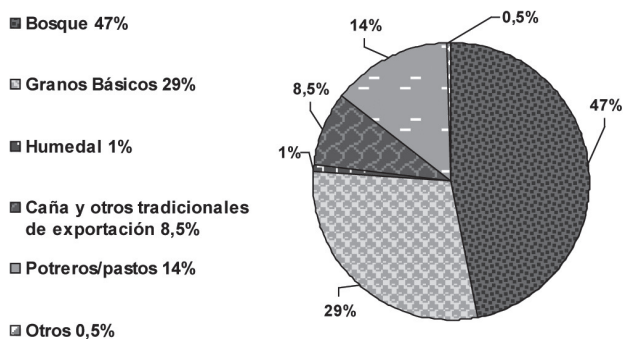
Fuente: Secretaría General de Planificación de la Presidencia de la República de Guatemala, 2009.

La superficie total establecida con palma aceitera en Guatemala en el año 2010 fue de 101,784 ha, que si bien es relativamente elevada, de momento apenas representa el 14% de las 743mil ha (37% de la superficie agrícola total del país) que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) considera aptas para su cultivo.¹² Sin embargo es importante señalar que la superficie con palma africana en el año 2010 representa casi siete veces más de la que había en el año 2000 (ver Figura 1), monopolizando literalmente el uso del suelo en territorios como el Valle del Polochic o el sur de El Petén. En estos diez últimos años, la productividad se ha elevado hasta alcanzar el récord mundial de 5 tm/ha de aceite de palma (frente al promedio mundial de 3.2 tm/ha. GREPALMA, 2011; INDESA, 2008).

Así mismo, y de manera divergente con los discursos planteados desde los grupos de presión política y socio-ambiental de la industria, las nuevas plantaciones de palma entre el año 2000 y 2010 han incentivado (directa e indirectamente)¹³ cambios radicales en los usos del suelo (ver Figura 4), que impactan gravemente sobre la vulnerabilidad socio-ecológica y a la inseguridad alimentaria de la población guatemalteca, así como sobre los principales determinantes

del cambio climático (cambios en el uso de la tierra -18% y profundización del modelo de agricultura industrial -14% (Stern Review, 2006)).

Figura 4
Usos de la tierra en el año 2000 de las nuevas superficies establecidas con palma aceitera en Guatemala en el año 2010



Fuente: Elaboración propia junto al CONAP. Guatemala, 2011.

¹² Datos del Sistema de Información Geográfica desarrollado entre el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de la República, ante la ausencia de información oficial actualizada (la última información databa del año 2002). Bajo el término de “superficie establecida” nos referimos a palma aceitera que al menos lleva dos años sembrada (periodo mínimo a partir del cual logramos identificarla a través de fotografía aérea y teledetección (remote sensing)). Por este motivo, y con base en observaciones directas en campo, la superficie “sembrada” con palma aceitera es sensiblemente superior a la “establecida”.

¹³ Como veremos más adelante, muchas tierras dedicadas a la palma en el año 2010 fueron adquiridas previamente por intermediarios con la intención de su venta posterior a los agronegocios palmeros.

Coincidimos con otras autoras (Hurtado, 2008 y De Ruiters, 2009) con relación a los cuatro principales mecanismos bajo los que se ha venido expandiendo la superficie con palma aceitera en Guatemala:

1. Arrendamientos de tierra por 25 años, sobre todo a grandes terratenientes.
2. Grandes proveedores externos: Principalmente grandes terratenientes que siembran palma en sus tierras para proveer a los agronegocios palmeros.¹⁴
3. Compra de tierras por los agronegocios para establecer sus propias plantaciones de palma: Este mecanismo, que ha sido el más generalizado, viene desatando un proceso de contra-reforma agraria en el país, con dos tipos de impactos diferenciados sobre la distribución de la tierra en las áreas de expansión:

- a *Re-concentración* de medianas y grandes fincas en mega plantaciones de palma (zonas del Polochic Valle, Fray y Sayaxché).
- b *Concentración* de parcelas campesinas (zonas de Ixcán, Chisec, Fray y Sayaxché). Como se aprecia en la Tabla 1, alrededor de uno de cada diez hogares campesinos vendieron sus parcelas, las cuales fueron compradas en su mayoría por agronegocios palmeros. A pesar de las virtudes sobre la reducción de la pobreza señaladas por el Banco Mundial con relación a la venta de tierras (ver Apartado I) la mayoría de quienes vendieron recibió cantidades de dinero que ni le permitieron salir de la agricultura, ni volver a comprar tierra.

Tabla 1
Comunidades y hogares campesinos que vendieron tierra hasta octubre de 2010 en las zonas de estudio

Zona	Superficie establecida con palma en 2010 (ha)	Comunidades que vendieron (%)	Hogares que vendieron (%)	Comprador de la tierra (%)		
				Campesino	Ganadero	Intermediario/ agronegocio de palma
Ixcán	16,800	75% (Micro V)	13.51%	-	-	100%
Fray		25%	0.46%	-	-	100%
Chisec		25%	0.24%	50%	-	50%
Sayaxché	44,300	100%	28.61%	-	8.6%	91.4%
Polochic Valle y Sierra	6,800	0%	0%	-	-	-
Total	67,900		11.72%	0.83%	6.67%	92.5%

Fuente: Elaboración propia.

La mitad de los hogares cuyo jefe/a trabaja en la palma aseguró haber vendido “porque la tierra era improductiva”, y la otra mitad “para hacer frente a deudas”. En los hogares cuyo jefe/a no trabaja en la palma, la mitad aseguró haber vendido “bajo presión de terceros”, una tercera parte “porque la tierra era improductiva” y el resto “para hacer frente a deudas”. Entre los métodos conocidos de “presión de terceros” destacan la *coerción*, y la *amenaza*, que lamentablemente se lleva a la práctica en muchas ocasiones. En el Petén, se pudieron conocer expresiones tipo “*o me vendés a este precio o vuelvo a negociar con la viuda*” y es habitual encontrar agentes de seguridad privada de los agronegocios que intimidan a la población,¹⁵ negando derechos de paso por carreteras y caminos canibalizados por las plantaciones incluso a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones (CONAP 2008).

Siembra de palma bajo contrato en parcelas campesinas: Desde 2009 cuando muchas familias y comunidades Q’eqchi’ comienzan a resistirse con mayor firmeza a la

venta de sus tierras, los agronegocios palmeros encuentran un gran aliado para su expansión en el “Programa de Palma”, inexplicablemente parte del “Programa de Maíz” del

¹⁴ Este mecanismo de abastecimiento de los agronegocios palmeros ha sido considerado también como una excelente oportunidad para el lavado de dinero por parte del crimen organizado y del narcotráfico, bajo la figura de “ganaderos en reconversión productiva”. Sobre esta dinámica poco estudiada, ver el trabajo de la Pastoral Social del Petén (2009): “Guatemala nunca más: Otro Petén es posible”.

¹⁵ En las reuniones donde se reportaron este tipo de amenazas, se comentó que quienes las proferían tenían un “extraño” acento español. En el año 2008, durante trabajo de campo en Colombia, se pudo constatar que los agronegocios palmeros de Guatemala no sólo contrataron a ingenieros colombianos, sino también a agentes privados que usaron exactamente el mismo tipo de amenazas para despojar a miles de familias campesinas afro-colombianas de sus tierras (Alonso-Fradejas, *et. al.*, 2008).

hoy día Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA, el cual es parte del “Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2012” del Gobierno. El director del Programa de Palma, ex ingeniero de Palmas del Ixcán (Goldman Sachs & The Carlyle Group) asegura sin embargo que la motivación del programa fue la de “evitar más ventas de tierras”.

El Programa de Palma, presupuestado en US\$ 1.5 millones, busca sembrar 4,200 ha de palma aceitera en parcelas de campesinos organizados de las zonas de Chisec e Ixcán. Para ello fomenta contratos tri-partitos por 25 años (agronegocio-asociación-campesino) para otorgar créditos condicionados al campesino, los cuales se canalizan directamente al agronegocio por medio de la asociación, como subsidio por los servicios técnicos de medición/roturación y por las plántulas de palma.

Además de la dependencia de un solo comprador y de un precio variable fuera del control local o nacional (CIF-Rotterdam), el campesino asume por completo los costos de supervisión de la fuerza de trabajo, y el riesgo de la inversión: los contratos de crédito condicionado no incluyen ni un seguro agrícola, ni la remuneración de los costos de des-inversión y recuperación de la tierra en los que incurre el campesino cuando las palmas ya no sean productivas. Una vez más, las oportunidades señaladas por el Banco Mundial para la reducción de la pobreza a través de la agricultura por contrato parecen no trascender del plano teórico.

III. El papel del Estado y de las agencias internacionales de desarrollo

El Estado de Guatemala junto a otros en Centroamérica, viene desempeñando, con el apoyo de las principales Instituciones Financieras Internacionales en la región (BM, BID y Banco Centroamericano de Integración Económica), un rol clave de soporte y legitimación de los procesos de reestructuración territorial en favor de los intereses del capital primario-exportador en general, y de los del agronegocio cañero/palmero en particular. Y lo ha hecho siguiendo tanto la “lógica de territorio”, como la “lógica de capital” señaladas.

La acción de los Estados bajo una “lógica de territorio” se articula bajo “estrategias de territorialización” desarro-

lladas a lo largo de la formación social de los Estados modernos en Centroamérica, y entendidas como “las formas en que se controla el orden espacial, y de las personas en el espacio” (Sikor & Lund, 2009, en Monterroso, 2010). En la última década destacan fundamentalmente dos “estrategias de territorialización” desplegadas por parte del Estado de Guatemala:

Por un lado, la relativa a la subordinación de la política de tierra a la lógica de la Reforma Agraria Asistida por el Mercado (RAAM). Bajo el consejo y financiamiento parcial del Banco Mundial se conformó el Fondo de Tierras en Guatemala (y sus símiles hondureño y salvadoreño) con la doble finalidad de: i) otorgar créditos a grupos de población rural sin tierra o con tierra insuficiente, para la compra de tierra en el mercado, y ii) titular oficialmente los predios.

Respecto del primer mandato del Fondo de Tierras, es de sobra conocida la incapacidad del mercado para democratizar la estructura agraria en contextos como el guatemalteco en los que la tierra está muy concentrada en pocas manos,¹⁶ y en los que las tierras nacionales o bien ya se ocuparon, o bien se clasificaron como áreas protegidas. Entre 1997 y 2008 el Fondo de Tierras distribuyó apenas el 4% de la tierra productiva a menos del 5% de la población sin tierra (Alonso-Fradejas, 2008: 6). De hecho, desde 2008 a la fecha, el acceso a la tierra se ha re-interpretado como el otorgamiento de créditos pero para el arrendamiento de tierras (sin opción de compra).

Con respecto al mandato de la titulación de predios, debe señalarse que la necesidad de la población campesina e indígena de asegurar y fortalecer sus derechos de *tenencia* sobre la tierra (incuestionable en un contexto donde la amenaza de desposesión está siempre latente) ha sido también manipulada y re-interpretada desde FONTIERRAS como la necesidad de titulación (individual) para asegurar derechos de *propiedad* sobre la tierra. Efectivamente, la tierra titulada individualmente cuando las capacidades para hacerla producir se encuentran limitadas a nivel estructural, se torna fácilmente de un medio de producción y reproducción cultural, en un bien/mercancía enajenable.

Si consideramos además que este programa de titulación individual se viene desarrollando en el país en ausencia de un Registro de Información Catastral (donde al menos se reconocen otros derechos de tenencia comunal, colectiva, en usufructo, etc.) tenemos que son en definitiva la oligarquía criolla terrateniente y el capital financiero internacional en busca de tierra, agua y fuerza de trabajo sin opciones, los principales beneficiarios de una política de tierra basada en el postulado (neo)liberal del Banco Mundial relativo a que los “derechos de propiedad seguros [...] permiten a los mercados transferir tierra hacia usos y productores más eficientes” (BM, 2007: 138).

¹⁶ El Coeficiente de Gini con respecto a la distribución de la tenencia de la tierra en Guatemala involucionó de un 0.82 en 1979, a un 0.84 en 2002 (INE 2003). Esto supone que ya en 2002, aún en fase de gestación del nuevo impulso acaparador de tierras, el 78% de la tierra cultivable estaba en manos del 8% de los productores/as.

Por otro lado, la segunda “estrategia de territorialización” fundamental del Estado descansa sobre la creciente privatización y mercantilización de los bienes naturales desde la década de los 90, en cuyo marco se ha desplegado un excluyente Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (ver Monterroso, 2010). Éste cubre el 31% de la superficie nacional y otorga los derechos de control y administración de las reservas a ONGs conservacionistas, en detrimento de los derechos de los pueblos que históricamente las habita. Esta estrategia se articula regionalmente con las áreas de protección especial en el marco del “Corredor Biológico Mesoamericano”.

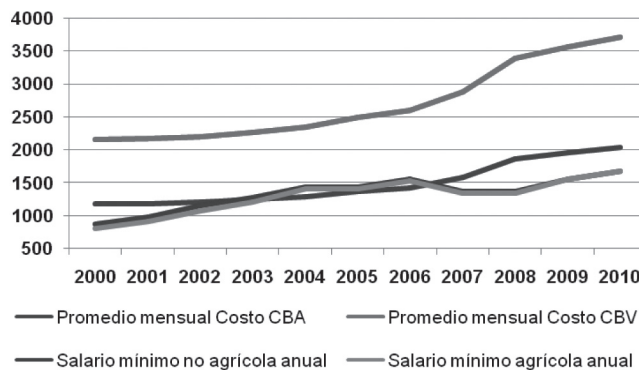
De este modo, la economía y ecología política características de las estrategias de territorialización señaladas han venido a profundizar y a complejizar la conflictividad histórica entorno a la validez y preeminencia de diferentes derechos con respecto al acceso, uso, tenencia y propiedad sobre la tierra y los bienes naturales en el territorio. A fines de 2010, el Gobierno de Guatemala había registrado 4,746 conflictos de este tipo vigentes, la mayoría de ellos situados en las tierras bajas del norte. Conflictos que en muchas ocasiones se dirimen de manera violenta, como en el caso del desalojo de 800 familias campesinas Q’eqchi’ de tierras destinadas al cultivo de caña de azúcar en el Valle del Polochic,¹⁷ o bien se enquistan en un sistema de justicia que carece de legislación y tribunales agrarios (tratándose estos conflictos bajo el Código Civil, en el que la preeminencia del “derecho a la propiedad” es incuestionable)¹⁸

y que, paralelamente, no reconoce ni respeta la voluntad de la población y comunidades indígenas (expresada por ejemplo a través de las consultas comunitarias y los cabildos) en el ejercicio de su derecho a la auto-determinación.

De manera paralela pero complementaria, el Estado de Guatemala despliega estrategias bajo una “lógica de capital” en respaldo del proceso de restructuración territorial en marcha. La maquinaria burocrática guatemalteca está supeditada históricamente a los intereses del gran capital –tanto al legal/tradicional de la oligarquía post-colonial, como cada vez más a los del ilegal/emergente del crimen organizado– y como vimos los actores tras las industrias extractivas y los agronegocios de la caña de azúcar y la palma aceitera, son de los más poderosos.

Bajo este híbrido burocrático-patrimonial (Weber, 1922: 172), no sorprende que el crecimiento económico en Guatemala en la primera década del s. XXI haya sido “anti-igualdad y pro-capital” (Gutiérrez, en *El Periódico*, 4/07/11). La participación de las “remuneraciones de los asalariados” en el PIB se ha reducido del 33.4% en 2001 hasta el 30.6% en 2009; de igual forma se ha reducido la participación fiscal en el PIB (de un 8.2% a un 6.8%), mientras que el “excedente de explotación” (retribución al capital) se ha incrementado del 38.2% en 2001, al 40.7% en 2009 (Banco de Guatemala, 2011). Una cruda realidad para las y los trabajadores, que se expresa en la continua pérdida del poder adquisitivo de los salarios, especialmente a partir del año 2007 (Figura 5), con el 60% de la población económicamente activa en 2010 en condición de subempleo (ENEI-INE, 2010).

Figura 5
Evolución del salario mínimo (agrícola y no agrícola)* y de los costos de las Canastas Básicas Alimentaria y Vital (en Quetzales corrientes). Guatemala, 2000-2010



* Los salarios mínimos incluyen el incentivo diario, y la bonificación mensual

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 2011 y MINTRAB 2011.

¹⁷ En marzo de 2011. Sobre este violento y paradigmático caso, ver: <http://www.valledelopolochic.net>

¹⁸ Ante la impunidad reinante en el sistema de justicia se instala desde 2008 la “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG). Una entidad de la ONU que tiene por mandato el tratamiento de casos de alto impacto vinculados a poderes paralelos, paramilitares y del crimen organizado, a través de un fiscal especial e independiente de la Fiscalía General de la República.

Por otro lado, tampoco extraña el reforzado marco normativo-institucional y de política pública en respaldo del capital primario-exportador. Además del “Programa de Palma” señalado, bajo la “lógica de capital” destacan de nuevo dos estrategias fundamentales.

La primera es de sobra conocida, pues insiste en profundizar la liberalización comercial y la desregulación de la inversión en un momento en el que las virtudes del libre comercio han sido cuestionadas incluso por países y agencias que lo impulsaron en los 90. El alza y variabilidad en los precios mundiales de los alimentos, traslada el interés del capital agro-alimentario centroamericano en los Tratados de Libre Comercio con los EEUU y la UE de la importación de granos básicos por debajo de los costos de producción, hacia la atracción de inversión extranjera interesada en tierras, bienes naturales y fuerza de trabajo sin opciones, así como a la exportación de grasas y aceites, azúcar, etanol, caucho y otros productos de las plantaciones agroindustriales.

Como resguardo del capital agrario frente a hipotéticas contracciones en la demanda internacional de estos productos, el Sistema de Integración Centroamericana aprobó en 2007 la “Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020”, que entre otros aspectos establece que las metas internas de sustitución de combustibles fósiles por agrocombustibles¹⁹ han de lograrse a partir de “incrementos en la producción y productividad de la caña y de la palma aceitera” (SICA-CEPAL, 2007), delimitando consecuentemente tanto la “Política Agrícola Común Centroamericana 2008-2017”, como la “Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030”.

La segunda estrategia del Estado bajo una “lógica de capital” se articula sobre planes como la “Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015” de Guatemala, que contemplan el desarrollo y/o profundización de las medidas de apoyo arancelario y fiscal, y de las inversiones

¹⁹ “Sustitución para el año 2020 del 15% de la gasolina y el diesel por biocombustibles en el transporte público y privado, así como la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero vía certificados o bonos de carbono para las empresas” (SICA-CEPAL, 2007).

²⁰ Con base en el trabajo de investigación en el área (en fase de edición a la fecha de redacción de este artículo), en el que a la par de entrevistas, grupos focales e historias de vida, se desplegó durante 2010 una encuesta con 588 cuestionarios diferenciados por sexo en 294 hogares campesinos de las seis zonas de estudio (ver Figura 3). Sus resultados nos permiten comparar además los impactos en hogares y comunidades por zonas, los diferentes impactos en hogares según la cantidad de tierra en posesión, y según si el jefe/a de hogar trabaja o no para un agronegocio de palma.

en infraestructura, logística y energía promovidas y requeridas para el desplazamiento espacial y temporal de los capitales extractivos. Así, entre Colombia y México abundan los mega-proyectos parte de la “Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020” (*ibid*), junto a los del “*Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica*” (anterior Plan Puebla Panamá), que enlaza en Colombia con la “Iniciativa de Integración Regional Sudamericana” (IIRSA), y en cuyo marco opera liderada por Colombia la “Comisión Mesoamericana de Biocombustibles”.

Finalmente, señalar que las dos estrategias plantea-das bajo una lógica de capital comparten: i) la participación de las elites globalizadas del Norte económico a través de fondos de inversión, instituciones financieras internacionales y agencias de cooperación, y ii) la creciente participación de las elites de las “economías emergentes”: de la banca pública de desarrollo brasileña, de capitales públicos y privados asiáticos (China/Taiwán y Corea del Sur), y en menor medida de Colombia y de Venezuela.

IV. Impactos situados: la población campesina-Q’eqchi’ de las tierras bajas del norte de Guatemala ante al capitalismo agrario flexible

Con base en la conceptualización planteada para los sistemas de sustento (ver Apartado I) nos aproximaremos a los impactos de la re-orientación primario-exportadora en Centroamérica a través del capitalismo agrario flexible de los agronegocios de la caña y la palma, sobre la vulnerabilidad humana y social de la población campesina-Q’eqchi’ de las tierras bajas del norte de Guatemala. Para ello, abordaremos las reconfiguraciones en tres elementos centrales de sus sistemas de sustento:²⁰ i) las capacidades de acceso, uso y control de los medios de producción/reproducción y de los bienes naturales; ii) las estrategias productivas y reproductivas familiares, y iii) las implicaciones laborales y los cambios en las relaciones sociales de producción y reproducción.

1. Impactos sobre los derechos y capacidades de acceso, uso y control de los medios de producción y de los bienes naturales

Con una tercera parte de los hogares con menos de 1 ha de tierra, y casi dos terceras partes con menos de 7 has, el panorama actual es crítico respecto a la tenencia de la tierra en la que fuera una zona de colonización agraria y desarrollo campesino a partir de la segunda mitad del s. XX. Si bien en la cantidad de tierra que tiene un hogar influyen múltiples factores, se ha observado que los hogares

campesinos con menos tierra están en las zonas donde la palma se ha extendido con más fuerza (Polochic, Sayaxché y Fray) mientras que donde la palma ocupa —aún— relativamente menos superficie (Chisec e Ixcán), los hogares campesinos tienen por lo general más cantidad de tierra.

Existen dos tipos principales de hogares sin tierra. El primero, mayoritario, está conformado por la segunda y tercera generación de quienes accedieron a la tierra a partir de los años 60. El segundo es más reciente, y está conformado por aquellos hogares que “perdieron” su tierra (ver Tabla 1). Cabe señalar que los hogares de las tierras bajas del norte (TBNs), cuyo jefe/a trabaja para la palma hoy día, perdieron su tierra relativamente más que los hogares donde el jefe no trabaja en la palma.

El 46% de los hogares de las TBNs no tienen título de tierra, y la tierra en los hogares cuyo jefe/a trabaja en la palma está relativamente menos titulada que la de aquellos hogares cuyo jefe/a no trabaja en la palma. Entre los que tienen título de tierras, el 64% tiene título individual/familiar, y el 36% colectivo o comunal. Casi todos los hogares que vendieron su tierra la tenían titulada (individualmente en el 80% de los casos) y la jefa de hogar, legalmente co-propietaria, se mostró a menudo en contra de la venta.

Esto permite afirmar que la titulación individual/familiar del FONTIERRAS ni ayuda a defender la tierra frente al despojo, pues además de facilitar la venta contribuye a destruir la organización e instituciones comunales de administración de la tierra, ni asegura en la práctica derechos de propiedad a las mujeres.

La mayoría de los habitantes de las TBNs siente que hay escasez de tierra, pero especialmente la sienten los hombres que trabajan en agronegocios palmeros. Dos de cada tres personas afirmaron, en primer lugar, que la escasez se debe al acaparamiento de tierras para las plantaciones de palma, y un 15% de los hombres señaló también al incremento de la superficie bajo áreas protegidas. En segundo lugar, se señaló que hay poca tierra debido al crecimiento de la población a lo largo de los últimos 50 años.

Para finalizar con la cuestión de la tierra, avanzar algo que retomaremos más adelante. Y es que si bien la *Renta Neta Anual Total* (RNETAT)²¹ de los hogares de las TBNs aumenta mientras más cantidad de tierra se tenga, las regresiones señalan que las capacidades para hacer producir la tierra (personales, familiares, comunitarias, ambientales, técnicas, económicas, etc.) determinan en mayor medida la RNETAT que la cantidad de tierra poseída. Así, asegurar los derechos de tenencia sobre la tierra es una condición indispensable pero insuficiente para desarrollar una agricultura campesina de calidad, que contribuya a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de sustento campesinos en las TBNs.

Además de la tierra, las capacidades de acceso y control del bosque y el agua son fundamentales en los sistemas de sustento campesinos-Q'eqchi'. Los bosques tropicales proveen a las familias de las TBNs de su principal fuente de energía (leña) así como de madera y otros materiales de construcción, plantas medicinales, caza y frutos que contribuyen a la seguridad alimentaria durante los “meses del hambre” (previos a la cosecha de invierno). Lamentablemente, las áreas mundiales cubiertas con bosques tropicales, como las de las TBNs, tienen las mejores condiciones edafo-climáticas para cultivar palma aceitera, que precisa de abundante agua para su irrigación. No se puede perder de vista el hecho de que el control sobre la tierra lleva asociados los derechos de uso del agua que transita o se ubica en ella. Esto ha llevado a los agronegocios palmeros tanto a desviar ríos de sus cauces para irrigar las plantaciones en verano, como a la apertura de canales para el desagüe del agua excesiva en invierno, que inunda los cultivos aledaños y desemboca en los ríos contaminada con agroquímicos.

Mucha población reportó problemas para acceder a los bienes y servicios del bosque, así como al agua para fines de riego y consumo, a la par de quebrantos de salud física y mental por el sentimiento de vivir cercados/as entre plantaciones de palma, o entre éstas y áreas protegidas. El grupo más afectado es el de las familias que vendieron su tierra, y cuyo jefe/a trabaja en la palma. Ninguno de estos hogares cuenta con bosque propio, la mitad de ellos no tiene acceso al bosque de ningún tipo, y la otra mitad tiene acceso tan sólo a bosques privados. Si comparamos el acceso al bosque entre hogares en los que el jefe/a trabaja en la palma y los que no, tenemos que estos últimos conservan aún no sólo más capacidades de acceso al bosque (75% vs 40.5% de los hogares) sino que además acceden en mayor medida que los hogares donde el jefe/a trabaja en la palma a bosques de tipo comunal (43.3% vs 18.9%).

Y es que aunque desde ciertos sectores de la conservación se insiste en defender lo contrario, la gran mayoría de la población considera que una plantación de palma definitivamente no es un bosque. Las mujeres, sin importar si su esposo trabaja en una empresa de palma o no, están aún más claras de esto pues al ser las responsables de proveer y administrar los bienes y servicios del bosque en el hogar sienten más la diferencia de la sustitución de bosques tropicales por plantaciones de palma aceitera.

²¹ La RNETAT incluye el valor de la producción (agropecuaria y no agropecuaria) vendida y auto-consumida, así como el de los jornales y salarios generados fuera del hogar y otros ingresos y gastos.

2. Impactos sobre las estrategias productivas y reproductivas de las familias campesinas-Q'eqchi'

Las estrategias productivas y reproductivas de la gran mayoría de hogares rurales de las TBNs giran en torno a actividades de base agropecuaria.²² Sin embargo, casi 8 de cada 10 hogares ya no pueden dejar la tierra en descanso y practicar agricultura de rotación por la presión que hay sobre la tierra, lo que afecta la productividad de los suelos (kársticos) que por su constitución no responden positivamente a la aplicación masiva de fertilizantes.

No puede perderse de vista que el 95.5% de los hogares cultivan maíz, independientemente de si tienen o no tierra, y de qué otras actividades productivas desarrollen. El cultivo del “sagrado maíz”, incluso en cantidades que no cubren las necesidades familiares, es un rasgo fundamental de la identidad y cosmovisión Q'eqchi' en las TBNs, además de una importante contribución a la seguridad alimentaria familiar.

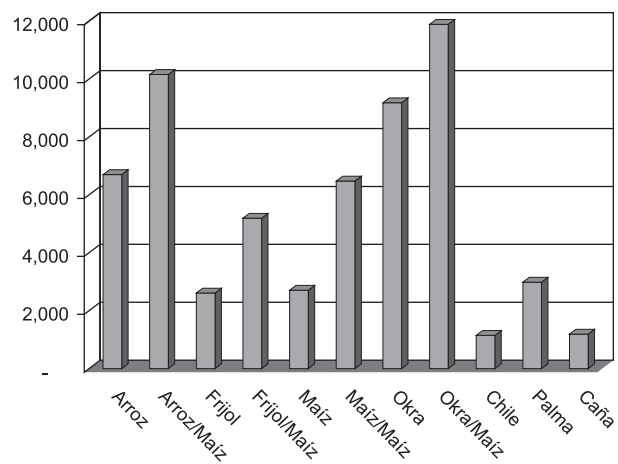
De hecho, tan sólo una tercera parte de las familias de las TBNs genera más de la mitad de su *Ingreso Monetario Bruto Anual* a partir del trabajo fuera del hogar. Aun con diferencias entre zonas y entre hogares donde el jefe/a trabaja en la palma y los que no, el *Valor de la Producción Agropecuaria Comercializada* es el principal aporte al *Ingreso Monetario Bruto Anual* de las familias de las TBNs, seguido de lejos por las transferencias condicionadas de renta del gobierno (menos del 1% de los hogares reciben remesas de migrantes). Incluso en el 53.5% los hogares cuyo jefe/a trabaja en la palma, el *Valor de la Producción Agropecuaria Total* (de auto-consumo y de mercado) representa más de dos terceras partes de la *Renta Neta Anual Total* del hogar.

De esto se deriva, por un lado, que para los trabajadores –temporales– en los agronegocios de palma es imposible vivir sólo de su jornal y que, por otro lado, cultivar la tierra (incluso arrendándola) tiene una importancia cultural y económica trascendental para la población Q'eqchi' de las TBNs. Por eso, la reducción de la superficie de tierra disponible para la siembra de alimentos, junto al alza especulativa

en su precio, impactan gravemente en las estrategias productivas y reproductivas de los hogares Q'eqchi', y muy especialmente de aquellos sin tierra que deben arrendar para sembrar.

Y es que el cambio en los sistemas agrarios con la llegada de la palma perjudica a la economía del territorio en su conjunto. Por un lado, la riqueza generada en las plantaciones de palma no se disfruta en los territorios donde se produce, sino que se va directamente a retribuir a la oligarquía terrateniente y al capital financiero internacional. Además, los agronegocios tienen el poder de negociar disminuciones e incluso evasiones respecto de tributos municipales sobre el comercio, el suelo e inmuebles, etcétera. Como se muestra en la Figura 6 para el caso del Valle del Polochic, la agricultura familiar campesina genera hasta 10 veces más riqueza territorial que la palma y la caña.

Figura 6
Producto Territorial Bruto (en Quetzales/ha)
por sistema de cultivo en el Valle del Polochic,
Guatemala, 2008



Fuente: Alonso-Fradejas, Alonzo y Dürr 2008, p. 70.

Ahora bien, el que la agricultura campesina genere más riqueza territorial que las plantaciones de palma y caña no significa que toda la población campesina-Q'eqchi' viva bajo condiciones económicas ideales. Si distribuimos la *Renta Neta Anual Total* de las familias entre los costos mensuales de las Canastas Básicas Alimentaria y Vital, podremos observar que la situación generalizada es de alta vulnerabilidad y elevada inequidad:

²² Los sistemas agrarios campesinos de las TBNs se caracterizan por: i) estar basados en agricultura de rotación; ii) ser poco dependientes de insumos agrícolas externos; iii) carecer de roza profunda del suelo y de riego (aparte de la lluvia), y iv) el papel económico y reproductivo muy importante de la crianza pecuaria, sobre todo de gallinas y cerdos.

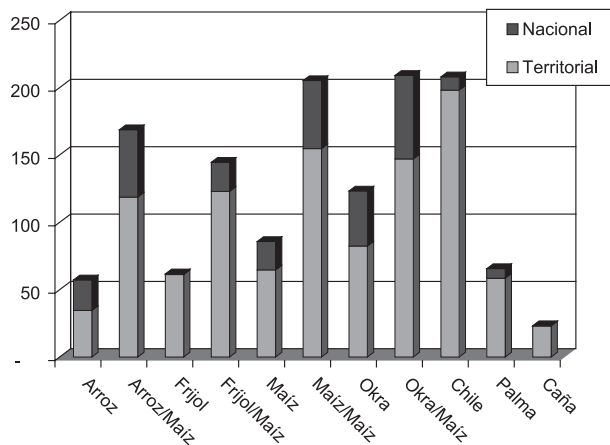
Tabla 2
Meses de cobertura de Canastas Básicas Alimentaria y Vital con la Renta Neta Anual Total de las familias de las TBNs de Guatemala, 2010

		Meses de Canasta Básica Alimentaria (CBA)	Meses de Canasta Básica Alimentaria (CBV)
Media		11.24	6.69
Desviación típica		7.45	4.44
Mínimo		0.04	0.02
Máximo		35.01	20.84
Percentiles	25%	5.79	3.45
	50%	9.61	5.72
	75%	15.13	9.01

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, las plantaciones de caña y de palma generan mucho menos empleo que la agricultura campesina, no sólo a nivel territorial sino también nacional (Figura 7). Es más, los hogares cuyo jefe/a no trabaja en la palma generan relativamente más empleo (familiar y para terceros) que aquellos donde el jefe/a trabaja en la palma.

Figura 7
Empleo generado (en jornales/ha). Al nivel territorial y nacional, por sistema de cultivo en el Valle del Polochic, 2008



Fuente: Alonso-Fradejas, Alonzo y Dürr, 2008, p.71.

2 de cada 10 jefes y jefas de hogar, y en total cerca del 15% de la población rural activa de las TBNs, trabajan para un agronegocio palmero, sobre todo allá donde hay más superficie establecida con palma (Sayaxché, Polochic y Fray).

Cabe señalar que hoy por hoy, si bien el 34% de los jefes/as de hogar de las TBNs con menos de 1 ha de tierra trabajan en la palma, el 49% de ellos aún trabaja en parcelas campesinas.²³ Esto es un claro indicador de que la población Q'eqchi' sin tierra de las TBNs prefiere y/o logra trabajar más en parcelas campesinas que en plantaciones de palma. Una vez más, la bondad señalada por el Banco Mundial acerca de la re-ubicación de los "productores menos eficientes" despojados de sus tierras como trabajadores de las plantaciones industriales, no encuentra eco en el caso de Guatemala. Efectivamente, aunque el pago promedio por jornal pueda llegar a ser casi la mitad en una parcela campesina con relación a una plantación de palma, en la parcela campesina se suele incluir almuerzo, no hay que soportar capataces y se trabaja menos horas (entre 4 y 6 vs. 8 y más en la palma) lo que permite al trabajador/a seguir atendiendo su propia parcela (aun arrendada) y cumplir con sus responsabilidades comunitarias.

De hecho, los hogares cuyo jefe/a no trabaja en la palma tienen incluso un *Ingreso Anual del Hogar por Trabajo Remunerado* fuera del hogar promedio superior a aquellos donde el jefe/a trabaja en la palma, y una *Renta Neta Anual Total* más diversificada (menos vulnerable) que depende relativamente menos del *Ingreso Anual del Hogar por Trabajo Remunerado* fuera del hogar, y en la que tiene más peso el *Valor Total de la Producción Agropecuaria* (de mercado y autoconsumo).

Tan sólo una cuarta parte de los hogares de las TBNs tienen algún miembro ocupado en trabajos no agropecuarios. El trabajo y el empleo en actividades no agropecuarias son más frecuentes en aquellas zonas donde las economías campesinas son más maduras y/o dinámicas, así como en aquellos hogares donde el jefe/a no trabaja en la palma.

²³ Visto de otro modo: el 61% de los jefes/as de hogar trabajadores en parcelas campesinas tiene menos de 1 ha de tierra, el 11% entre 1 y 3 ha, y el 19% entre 3 y 7 ha, mientras que sólo el 38% de los jefes/as de hogar trabajadores en la palma tienen menos de 1 ha, el 67% entre 1 y 3 ha, y el 43% entre 3 y 7 ha.

3. Implicaciones laborales y cambios en las relaciones sociales de producción y reproducción en las tierras bajas del norte

“Fuimos instrumentos del café primero, del algodón y del ganado después, y ahora de la palma y de la caña. Ya conocemos lo que nos vienen a ofrecer estos empresarios.” (Testimonio de un anciano Q’eqchi’ de 81 años del Polochic-Sierra. Traducción propia).

Efectivamente, aunque en *esencia* la oferta laboral de los agronegocios de la caña y de la palma converge con aquella de la oligarquía terrateniente post-colonial desde 1850, existen sustanciales diferencias de *forma*: Las relaciones de producción caracterizadas por el trabajo semi-servil (colonato) y el paternalismo autoritario-explotador de los finqueros tradicionales, quedan relegadas ante las nuevas relaciones de producción flexible de los agronegocios de la caña y de la palma.

Para empezar, los agronegocios suelen contratar por periodos cortos, con flexibilidad de disposición temporal (días que sí se trabaja, y días que no)²⁴ y geográfica (en distintas fincas dentro de cada zona, o migrando temporalmente a plantaciones de otra zona).

Entre quienes reportaron haber trabajado para una empresa de palma pero ya no trabajan más en ella, si bien 4 de cada 10 fueron despedidos, 6 de cada 10 abandonaron el trabajo. Las razones del abandono varían desde no cobrar siquiera el salario mínimo, a no tener tiempo para trabajar en la propia parcela, ni para ocuparse del trabajo comunitario (faenas), o el ser maltratado por el capataz.²⁵ En cuanto a los despidos, las razones también son variadas pero se han podido conocer de primera mano casos de despidos sin razón aparente y sin pago de prestaciones, constituyendo violaciones a los derechos laborales que, a pesar de existir varios procesos judiciales abiertos en contra de agronegocios cañeros y palmeros, rara vez se judicializan por miedo a represalias.

Casi 8 de cada 10 jefes/as de hogar trabajadores en empresas de palma fueron reclutados por contratistas, quienes daban las instrucciones, supervisaban y trasladaban el pago. De este modo se evitan vínculos laborales directos con el trabajador/a temporal. Precisamente, respecto de las condiciones laborales relativas a transporte, alimentación, hospedaje, seguros, prestaciones, etc.,

cabe señalar que 70% de los jefes/as de hogar trabajadores en la palma reportaron no recibir nada más que su jornal, y sólo 28% aseguró recibir prestaciones de ley. Los agronegocios de la palma pagan jornales diversos, según empresa, zona y tarea, pero los jornales de los trabajadores/as o peones agrícolas promedian los Q. 60 al día (US\$ 7.5). Generalmente, el jornal está ligado a la productividad, por lo que 9 de cada 10 de las y los jornaleros necesiten trabajar 8 horas o más al día para llegar a cobrar el jornal completo.

A su vez, este nuevo ciclo de despojo indígena y campesino tiene implicaciones importantes sobre la diferenciación social comunitaria en las TBNs. Por un lado, genera una masa crítica de fuerza de trabajo de reserva para los agronegocios de monocultivos industriales. Este grupo, aunque heterogéneo, tiene en común una *Renta Neta Anual Total* familiar menos diversificada y supeditada al régimen laboral flexible de los agronegocios, así como la subordinación de su conducta social al escrutinio de los contratistas, quienes deciden a quien reclutar y para que tareas (y por lo tanto, bajo qué condiciones laborales/económicas).

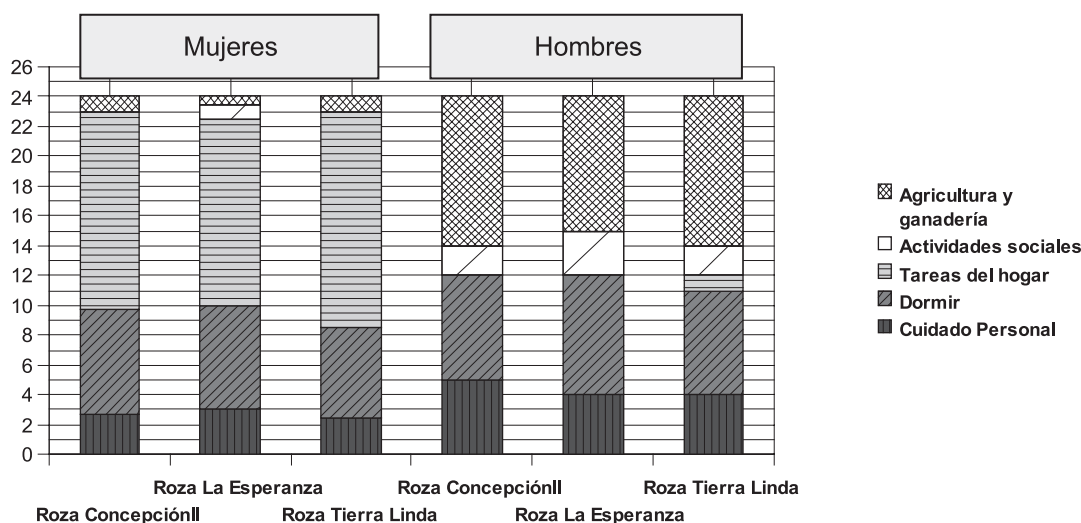
Por otro lado, genera una nueva entrega del grupo de familias “despojadas”, no necesariamente jóvenes, que no lograron ni dejar la agricultura, ni recuperar la tierra. Este grupo suele optar o bien por abandonar la comunidad, o bien por quedarse trabajando para las empresas de palma y/o en otras actividades de base agropecuaria, además de arrendando pedazos de tierra para cultivar sus propios alimentos.

Así mismo, los cambios en las relaciones sociales de producción se expresan en la diferenciación sexual del trabajo a lo interno de los hogares campesinos. Como vemos en la Figura 8, las mujeres dedican una mayor proporción de su tiempo con relación a los hombres, a tareas de reproducción familiar (cuidados, limpieza, comida, etc.) que a las de cuidado de ellas mismas. Los hombres en cambio dedican más tiempo a actividades fuera del ámbito doméstico (comunidad, actos litúrgicos, etc.) donde la participación de la mujer casi no existe. Además, las mujeres participan activamente en trabajos comunitarios (faenas) y actividades productivas agrícolas en la parcela principal, que en principio son responsabilidad del hombre, mientras este trabaja para un agronegocio de caña o palma.

²⁴ El 56% de los jefes de hogar trabajadores en la palma reportó trabajar sólo entre 1 y 3 meses al año, el 15% reportó trabajar por 6 meses y sólo el 29% durante todo el año de corrido.

²⁵ Existen casos donde la decisión de abandonar, o ni siquiera iniciar, el trabajo para un agronegocio cañero/palmero fue grupal (incluso comunitaria) ante el incumplimiento de las empresas de sus ofrecimientos de apoyo a escuelas, carreteras, centros de salud, etcétera.

Figura 8
Uso del tiempo por mujeres y hombres en el mes de la roza del suelo para el maíz



Fuente: Alonso-Fradejas & Mingorria, 2010, p. 33.

Por si esto fuera poco, en aquellas comunidades donde aumentó la migración laboral temporal de los hombres se ha dado una mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual, y en general, el despojo y proletarianización campesina vinculado al crecimiento de las plantaciones de caña y palma lleva asociado el crecimiento de problemáticas sociales como el alcoholismo y el juego, que repercuten en mayores índices de violencia contra las mujeres y niños/as. En este contexto, las mujeres campesinas Q'eqchi' resultan un pilar fundamental en el hogar y en la comunidad, y sus roles productivos y sustentadores de la vida una condición *sine qua non* para la reproducción de las economías campesinas de las TBNs hoy día.

Así mismo, es preciso señalar que más allá de en los elementos materiales de diferenciación social (tierra, renta, uso del tiempo, etc.) la erosión de la base natural y productiva junto a los cambios en las relaciones sociales de producción y reproducción señalados, se expresan de manera importante en las comunidades Q'eqchi' a través de elementos simbólicos, políticos y culturales.

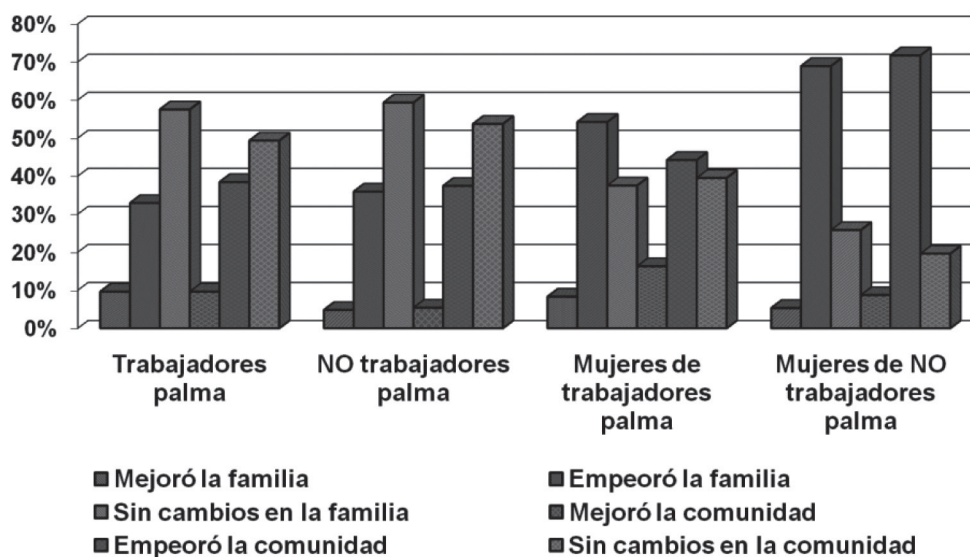
Por un lado, el despliegue del capitalismo agrario flexible reifica las relaciones sociales en las comunidades Q'eqchi', sometiéndolas progresivamente a una lógica monetaria. Limitantes como las esbozadas para los sistemas de agricultura de rotación, dificultan las relaciones tradicionales de economía moral entre familias campesinas-Q'eqchi' (como el intercambio de trabajo, de semillas, o de parcelas).

Por otro lado, esta presión creciente sobre el tiempo, la tierra y los bienes naturales afecta las capacidades de agencia social y acción colectiva de la población Q'eqchi' de las TBNs, las cuales se encuentran fuertemente arraigadas en las formas propias (nuevas y/o tradicionales) de organización comunal, a través de las que administran los derechos sobre la tierra y los bienes naturales, entre otros aspectos de la vida comunitaria.

Precisamente, es con esta finalidad que los agronegocios de la caña y de la palma cuentan con numerosos y variados operadores –“coyotes”– a sueldo en los territorios de interés actual o potencial. Se trata de figuras (físicas y jurídicas) de importancia política, religiosa y simbólica (alcaldes auxiliares, maestros, líderes comunitarios, fundaciones privadas, pastores de iglesia, etc.) que han logrado sembrar la discordia en muchas comunidades a través de una dominación carismática (Weber, 1922: 72). Desde su participación en los órganos de administración de recursos y gobierno comunitario, estos “coyotes” logran entrar a disputar el poder simbólico (Bourdieu, 1990) alrededor de los intereses y narrativas que primarán y serán representadas en la visión compartida sobre el desarrollo y/o el buen vivir por parte de la comunidad.

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, hasta finales de 2010 la mayoría de las personas encuestadas (incluso trabajando en la palma) creen que las condiciones de vida en el hogar y en la comunidad o se mantienen igual, o han empeorado con la palma.

Figura 9
Respuestas ante las preguntas: ¿Cambiaron las condiciones de vida de tu familia/comunidad cuando llegó la palma? ¿Cómo cambiaron?



Fuente: Elaboración propia.

Esta disputa del poder simbólico en el ámbito comunitario-territorial tiene como finalidad la promoción del imaginario sobre el “cambio para el progreso” (como la “Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015”, en el ámbito nacional, y el “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”, en el plano regional). Planteamientos como el de “*mejor dejá de sembrar tu maicito, vendé tu tierra que apenas da y trabajá para la empresa de palma para ganar buen pisto*” conforman el discurso de la agresión cultural a la que se ven sometidas las comunidades Q’eqchi’ en las TBNs. Un discurso orientado a controlar y a debilitar la organización comunitaria, para reasignar percepciones y valores en torno a la propiedad, la tierra, el trabajo, el ocio, el consumo, la familia y, en definitiva, sobre la cosmovisión y la propia interpretación del desarrollo.

A esta agresión en el plano simbólico-cultural se suman la re-emergencia de viejos mecanismos de control social característicos del moderno sistema-finca del s. XIX, y la creciente paramilitarización territorial por parte de elementos al servicio de intereses privados (seguridad de los agronegocios y de otras empresas extractivas, y crimen organizado), para conformar una poderosa estrategia orientada a debilitar la lucha comunitaria, campesina e indígena, en el territorio en disputa.

V. Reflexiones finales

La válvula de escape a la crisis de (sobre)acumulación por la que ha optado el capital financiero internacional en esta primera década del s. XXI redirigiendo su interés hacia las materias primas, confiere a las elites de muchos países (aún) ricos en recursos del Sur global, como los centroamericanos, un renovado incentivo para la inserción económica mundial a través de un modelo primario-exportador.

La reubicación bajo una lógica de seguridad nacional de la producción agrícola (de alimentos, fibras, agrocombustibles, etc.) en el Sur global profundiza la mercantilización de la tierra y de los bienes naturales, mientras apunta hacia cambios en el sistema agroalimentario mundial cuya consistencia aún está por verse ante el carácter altamente especulativo de esta inversión (neo)extractivista. El impulso primario-exportador va de la mano con la restructuración de los territorios rurales para posibilitar este nuevo ciclo de “acumulación por desposesión”, el cual, articulado bajo una “lógica de territorio” y una “lógica de capital”, despliega en Centroamérica un modelo *flexible* de capitalismo agrario. Un modelo abanderado por agronegocios como los de la caña y la palma, que dinamiza un nuevo ciclo de acumulación agraria, despojo y dominación territorial sobre la base de la hiper-explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo, y que al afectar negativamente los componentes centrales

de los sistemas de sustento de la población rural, lleva los niveles de vulnerabilidad humana y social a cotas críticas.

En este contexto, la irresuelta y conflictiva “cuestión agraria” recobra importancia medular en la disputa política alrededor del “modelo de desarrollo”. Hasta la fecha, y salvo limitadas excepciones, las burocracias patrimoniales centroamericanas se han centrado en asegurar privilegios post-coloniales para la elite criolla-terrateniente que, directa y/o indirectamente, está detrás de los capitales (neo) extractivos. Sin embargo, como señala Rubio (2009: 34-35)

la integración o exclusión de los campesinos en cada fase productiva, no deriva del funcionamiento mecánico del sistema,

ni de un determinismo económico, sino de la situación política que impera en el ascenso de un nuevo modelo de desarrollo, el cual genera mecanismos estructurales de inclusión o exclusión de los campesinos [...] al tiempo que dichos procesos son reproducidos o menguados por el conflicto social.

Un conflicto complejo en el caso centroamericano, pues la cuestión agraria se resitúa en la disputa alrededor de los modos de apropiación y ejercicio del poder territorial entre comunidades rurales y sus expresiones en movimientos indígenas, campesinos, de mujeres, etc., y el capital primario-exportador respaldado por el Estado, instituciones financieras internacionales, grupos para-militares y medios de comunicación de masas.

Referencias

- ◆ Alonso-Fradejas, A. (2011), “Expansion of oil palm agribusinesses over indigenous-peasant lands and territories in Guatemala: *Fuelling a new cycle of agrarian accumulation, territorial dominance and social vulnerability?*”, Ensayo y ponencia en el panel 28: “Biofuels and Livelihoods”. Conferencia Internacional sobre Acaparamiento de Tierras, Universidad de Sussex, Reino Unido, 6 al 8 de abril de 2011.
- ◆ Alonso-Fradejas, A. y S. Mingorria (2010), *Mujeres Q`eqchi ante el capitalismo agrario flexible: afrontándolo desde las economías campesinas del Valle del Polochic, Guatemala*. IDEAR-CONGCOOP, Universitat Autònoma de Barcelona e International Land Coalition.
- ◆ Alonso-Fradejas, A., S. Mingorria y G. Gamboa (2010), Los agrocombustibles y la profundización del capitalismo agrario flexible en territorios campesinos e indígenas de Guatemala. Ensayo preparado para el panel 12: “Impactos socio-ambientales de los biocombustibles y del cambio climático en América Latina”, VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, 15 a 19 de noviembre de 2010, Brasil.
- ◆ Alonso-Fradejas, A. (2009), The Human Right to Food versus the new colonizers of agriculture in Guatemala: Sugarcane and African palm, in M. S. Emanuelli, J. Jonsen and S. Monsalve Suárez, *Red Sugar, Green Deserts*, FIAN International, Habitat International Coalition and Latin America- Sweden Solidarity Network.
- ◆ Alonso-Fradejas, A., F. Alonzo and J. Dürr (2008), *Caña de azúcar y Palma Africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala*, IDEAR-CONGCOOP, Magnaterra Editores, Guatemala.
- ◆ Araghi, F. y P. McMichael (2006), “Regresando a lo histórico-mundial: una crítica del retroceso postmoderno en los estudios agrarios”, en Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, *Alasru*, N° 3.
- ◆ Banco Mundial (2010), *Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?*, World Bank, Washington, DC.
- ◆ Banco Mundial (2007), *Informe sobre el desarrollo mundial 2008: Agricultura para el desarrollo*, Washington D.C.
- ◆ Harvey, D. (2003), *The New Imperialism*, Oxford University Press, Nueva York.
- ◆ Mann, H. y C. Smaller (2010), *Foreign land purchases for agriculture: what impact on sustainable development? Sustainable development innovation briefs*, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Nueva York, enero de 2010.
- ◆ McMichael, P. (2005), “Global development and the corporate food regime”, en F.H. Buttel and P.McMichael eds. *New Directions in the Sociology of Global Development*, Amsterdam: Elsevier.
- ◆ Monterroso, I. (2010), *Áreas protegidas como estrategias de territorialización: viejas dinámicas, nuevos conflictos*, Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. FLACSO, México, mayo de 2010.
- ◆ Timilsina, Govinda R., S. Mevel y A. Shrestha (2011), *World Oil Price and Biofuels. A General Equilibrium Analysis*, Policy Research Working, Paper 5673, Banco Mundial, Washington D.C.
- ◆ Rubio, B. (2009) (3era ed.) *Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*, SIPAE, Universidad Autónoma de Chapingo, Dirección de Centros Regionales Universitarios de la UACH y Plaza y Valdés, Ecuador
- ◆ UNCTAD (2009), *World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development*.
- ◆ White, B., y A. Dasgupta (2010), “Agrofuels capitalism: a view from political economy”, in *Journal of Peasant Studies*, 37: 4, pp.593 - 607.